



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, Servicios Sociales e Igualdad, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la modificación de las previsiones contenidas en el citado Real decreto 95/2009, a los solos efectos de incorporar una nueva disposición transitoria tercera, conforme a la cual "La inscripción de resoluciones firmes en el registro de penados y de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias no firmes, medidas cautelares, autos de declaración de rebeldía y requisitorias en el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes por la comisión de faltas contra el patrimonio a que se refiere el título II del libro III del Código Penal, se producirá a partir del momento de entrada en vigor del presente Real Decreto. Por el Ministerio de Justicia, en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, se adoptarán las medidas oportunas para ampliar progresivamente el ámbito de aplicación de esta norma a los restantes tipo de falta previstos en el Código Penal".

Tal y como indica la Exposición de Motivos, dicha reforma procede de lo establecido en la disposición adicional segunda del Código Penal, introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en que se prevé la creación de un registro electrónico para las faltas, habiéndose considerado oportuno que el cumplimiento de dicha previsión se realice, en cuanto a las faltas enumeradas en el texto sometido a informe a través del Sistema de Registros regulado por el Real Decreto 95/2009.

Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe oponer objeción a lo establecido en el citado Proyecto.